

Revista Semanal del Comando Central del ELN
Edición N.654 del 8 de octubre de 2018

LUCHAR SI PAGA POR EDUCACIÓN PÚBLICA



SUMARIO

Insurrección
Revista Semanal del Comando Central del ELN
Edición N.654 / octubre - 8 - 2018



ENFRENTAR A LA GUERRA

"La guerra internacional entre pueblos americanos no puede ser sino el efecto de una locura criminal, no excusada por motivo alguno, ni por el menor pretexto"

Eduardo Santos Montejo
(Bogotá 1888 – Bogotá 1974)

Al examinarse el presupuesto nacional para el 2019 y sus asignaciones, es evidente que sus prioridades están en torno a la guerra y no en la paz. Ello, da cuenta de la política que rige el presente Gobierno y los caminos que ha elegido. Lo cual no es una sorpresa, en tanto se corresponde con los planteamientos del partido Centro Democrático y con las prácticas de Gobierno del expresidente Uribe Vélez.

El Presidente Duque, dijo en el discurso que pronunció recientemente en la ONU, que "nuestro Gobierno recibió un proceso [de paz] frágil en varios frentes… está la fragilidad presupuestal: se realizaron muchos compromisos sin destinar suficientes recursos", con lo que justificó la no destinación de recursos para la implementación de los acuerdos de paz hechos con las FARC.

En contraste con ello, el secretario general de la ONU, António Guterres planteó este 4 de octubre, en el Tercer Informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, sus preocupaciones por "los pocos recursos para echar a andar los compromisos adquiridos entre el Estado y el hoy partido FARC".

La salud pública, al igual que años anteriores, sigue siendo uno de los rubros reducidos en el presupuesto nacional. Para los hospitales sólo destinan 500 mil millones de pesos. Pero, téngase en cuenta que solamente el Hospital Universitario del Valle tiene un déficit 120 mil millones.

Cálculos no oficiales señalan que sólo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 50.000 familias, se necesitarían 1,8 billones. Pero para ello Duque no hace ninguna destinación presupuestal.

Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, Duque, le dará un tratamiento de guerra a los campesinos de las zonas cocaleras. Allí su esfuerzo estará en la erradicación forzosa y la fumigación con Glifosato. Lo anterior es más evidente si tenemos en cuenta que al sector agrícola y en especial a lo relacionado con la economía campesina, se le resta en este presupuesto, el 20 por ciento.

Para las instituciones de Educación superior, se asignan solo 100 mil millones de pesos, cuando la deuda histórica con las Universidades públicas asciende en este momento a 17 billones. El solo déficit de la Universidad Nacional, es de 60.000 millones.

Los estudiantes en el pliego de 10 puntos que han presentado para las movilizaciones que realizarán este 10 de octubre y con el que están levantando una lucha de envergadura para las próximas semanas, reclaman un incremento presupuestal inmediato para las Universidades públicas de 4,5 billones. El mundo está expectante sobre el manejo de guerra o de paz que le dará este Gobierno a las protestas y movilizaciones estudiantiles de esta semana.



Si hablamos de avanzar hacia la paz, es elemental que en la destinación del gasto se establezca un incremento significativo para educación, salud, economía campesina, comunidades negras e indígenas, implementación de los acuerdos de paz, y para cumplir acuerdos hecho con las movilizaciones sociales de los últimos años, etc. Pero es claro que, para todo ello la élite gobernante destina cada vez menos en el presupuesto nacional.

En contraste con lo anterior, las clases dominantes embriagadas de triunfos militares, ahora pasan a un estadio de locura con la agresión a Venezuela y de perpetuar la guerra interna, al darle la espalda a

los procesos de paz con la insurgencia. Por esto, el presupuesto militar para el 2019 ascenderá a 33,6 billones de pesos, lo que representa un incremento del 6 por ciento y equivale al 13 por ciento del presupuesto total.

En las decisiones sobre el presupuesto, el régimen refleja su inclinación hacia la guerra tanto interna como externa, tomando distancia con la construcción de paz en el país y en el continente, contrariando el precepto que el Estado colombiano suscribió, en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), de comprometerse en "hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz".

Al pago de la deuda externa destinan el 20,5 por ciento del presupuesto total. Deuda externa y eterna, por la que cada vez pagamos más y cada vez debemos más, que ya representa el 52,3 por ciento de toda la riqueza anual producida en Colombia (PIB).

El gasto militar y la amortización de la deuda, devoran el 33,5 por ciento del presupuesto, es decir más de la tercera parte del mismo. Mientras que las Universidades públicas, los hospitales, el campo, los programas de sustitución de cultivos, el medio ambiente, la implementación de los acuerdos de la Habana, la cultura, el deporte y otros relacionados con los programas sociales y la paz, profundizan su crisis por carencia de recursos.

Este es el panorama de guerra en que prosigue el régimen, registrado en sus decisiones presupuéstales. Esas son las políticas a las que nos enfrentamos y frente a las cuales ya empieza a brotar la movilización y la protesta social, tal como lo veremos las próximas semanas con los estudiantes en las calles, reclamando presupuesto para la educación pública, paz y otros destinos para el país. En los próximos meses, este será también el camino que asumirán distintas organizaciones, procesos sociales y la oposición misma; y ojalá el Gobierno no le dé un trato de guerra.



FISCAL ACOSA A LA JEP



¿QUIÉN IMPIDE A DUQUE PROSEGUIR LA SOLUCIÓN POLÍTICA?



La Habana, octubre 3 de 2018

Señores

Comisión de Paz del Senado
Congreso de la República
Bogotá

Reciban un cordial saludo.

A la fecha de hoy se cumplen 63 días desde la última reunión de la mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra Delegación en todo este tiempo se ha mantenido en la Mesa, a la espera que el Gobierno honre los Acuerdos de paz firmados con el Estado y envíe su Delegación, para darle continuidad a este proceso de solución política del conflicto, que hemos emprendido.

El Gobierno está colocando exigencias unilaterales, que rompen la bilateralidad de un proceso de negociación, con los que desconoce acuerdos previos. Si Duque considera que se requieren ajustes a los compromisos existentes, estos deben ser examinados y acordados por las dos partes en la Mesa.

Si este Gobierno falta a la palabra y no cumple con los acuerdos de paz, coloca en grave peligro los avances del proceso de solución política, que están en curso con las FARC y con el ELN.

Conocedores de su compromiso con la paz del país, solicitamos sus buenos oficios para poder seguir avanzando es lograr la terminación del conflicto armado y acordar transformaciones para una Colombia en paz y equidad.

Para escucharlos a ustedes y expresarles nuestras ideas, les proponemos realizar un encuentro directo con nuestra Delegación en los próximos días.

Cordialmente,

Pablo Beltrán

Delegación de Diálogos
Ejército de Liberación Nacional



COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO ACOGE SOLICITUD DE BUENOS OFICIOS

Bogotá 04 de octubre de 2018

Comunicado a la opinión pública

La Comisión de paz del Senado de la República acoge la solicitud del ELN de buscar nuestros buenos oficios para facilitar el pronto reinicio de los diálogos de paz y de la Mesa de conversaciones.

La Comisión de Paz ha informado al Gobierno nacional de la recepción de esta solicitud y espera que en los próximos días pueda coordinar con el señor Presidente de la República los pasos a seguir.

Para avanzar en el proceso de negociación entre el Gobierno y el ELN. La Comisión de paz Considera conveniente que el ELN le aclare al país si tiene en su poder a los 10 ciudadanos colombianos que el Gobierno ha listado como en poder de esa guerrilla.

(siguen las firmas de los Copresidentes de la Comisión de paz del Senado de la República)



"EL ACUERDO DE PAZ HA SIDO TRAICIONADO"

Señores

Comisión de paz del Senado
Congreso de la República
Bogotá

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

Sin duda, la inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha conver-

tido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz.

Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz -que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.

Pero, ¿Qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, ex-



Timo. Raul. Caraballo. Marulanda
Manuel Pérez. Cano. Joselo
Casa Verde, octubre de 1990



traditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

Por otra parte, las modificaciones al texto original de lo convenido transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y "conejo". Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos. ¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante?

El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU.

A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia.

También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el "fast track" legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte.

No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso

anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos.

Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos.

El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de 15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos.

Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.



Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

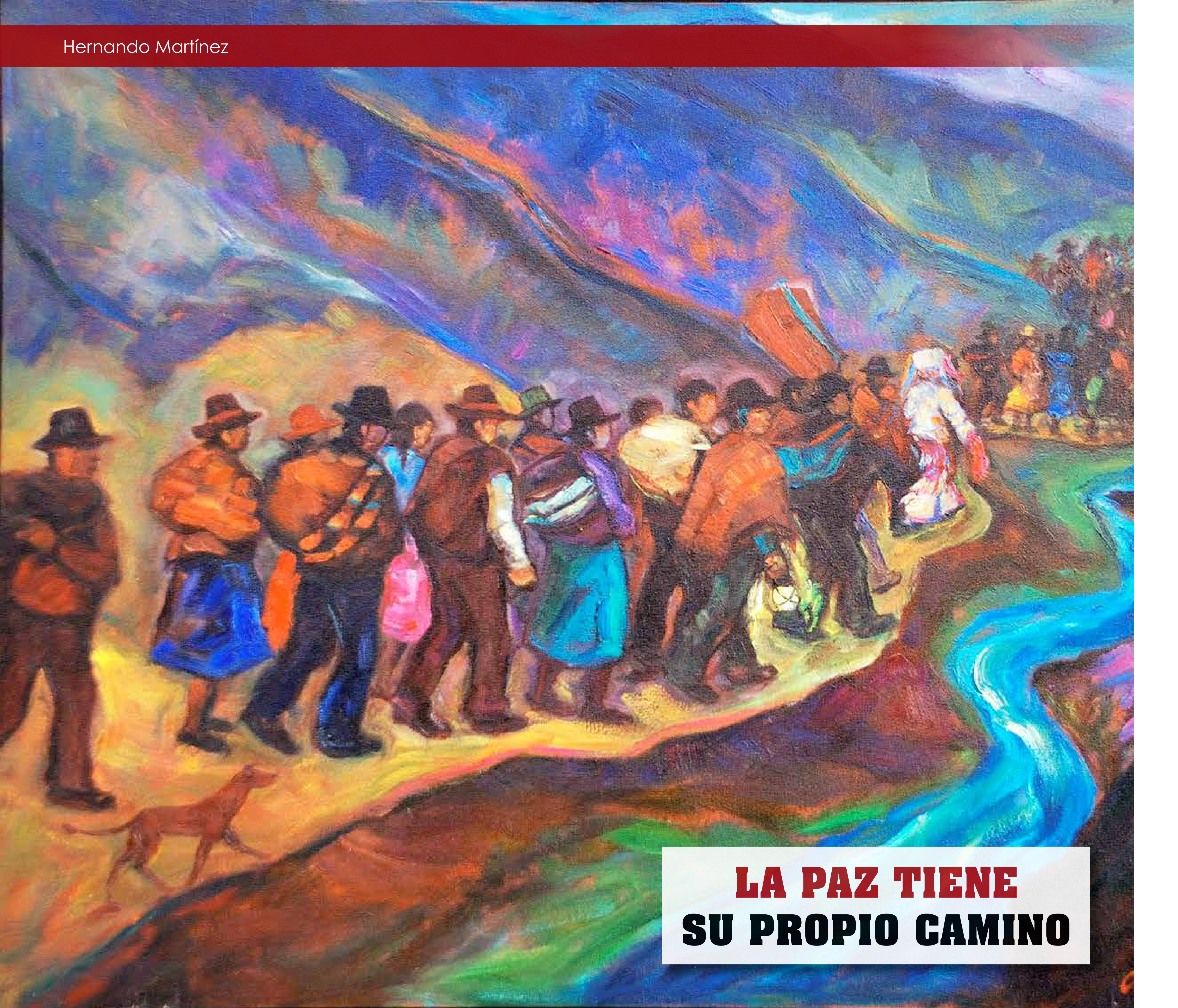
Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

Iván Márquez

Oscar Montero (El Paisa)

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato del comandante Jorge Briceño.

Hernando Martínez



LA PAZ TIENE SU PROPIO CAMINO

"No hay democracia si no se entiende la Nación como una misión colectiva, un compromiso de todos"
Luis Carlos Galán Sarmiento
(Bucaramanga 1943 – Soacha 1989)

Ahora que el proceso de solución política pasa por un momento de empantanamiento, es necesario buscar puntos de encuentro en la visión sobre el conflicto interno, para "resolver los problemas fundamentales", como dijo Álvaro Gómez Hurtado (Bogotá 1919 – Bogotá 1995); que a nuestro criterio, son aquellos problemas que gestan el conflicto, tales como los territoriales, la propiedad de la tierra, la política minera y energética, la participación política, la violencia política, la exclusión y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

Encontrar una visión común del conflicto, es el presupuesto básico para llegar a tener una visión común sobre la paz, reflexión nacional en la que es indispensable la participación de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ejercicio que bien puede llamarse de Diálogo Nacional; partiendo de la convicción que la paz es el único camino, que hace viable a la nación colombiana.

El carácter del conflicto

En 1984, hace 34 años, el presidente Belisario Betancur, firmó un acuerdo de paz con las FARC, reconociendo el carácter político de las guerrillas. Las fuerzas de extrema derecha incrustadas en el Estado fraguaron el genocidio de la UP y de otros movimientos de izquierda, con lo cual destruyeron este acuerdo.

En adelante los gobiernos negociaron, o hicieron intentos de negociar, con todos los movimientos guerrilleros, dándoles reconocimiento político, a través de amnistías generales y de acuerdos de participación política; como el ocurrido en 1990.

A partir del año 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, reforzó en las Cortes, jurisprudencias que tratan a las guerrillas como grupos de delincuencia común, a la vez que criminalizó y señaló como "redes de apoyo a terroristas" a las organizaciones sociales y políticas que lo adversan.



Fotografía de Jesús Abad Colorado

Cabe destacar que durante el primer mandato de Uribe (2002-2006), sucedió el punto más alto de las acciones terroristas amparadas por el Estado, causando asesinato de líderes, masacres de pobladores, desplazamiento forzado y despojo de tierras; ola criminal promovida y amparada por políticos, gobernantes, congresistas, militares y empresarios; hechos de terror recrudecidos desde el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002). Oleada terrorista perpetrada por las fuerzas paraestatales y estatales, como resultado de la aplicación del Plan Colombia, inspirado y financiado por la plutocracia de los Estados Unidos.

El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), adelantó el proceso de solución política al conflicto, que en 5 años pactó el Acuerdo de Paz con las FARC. Igualmente, acordó una Agenda de conversaciones con el ELN.



El Gobierno de Iván Duque, desde su campaña electoral hasta la fecha, reduce en su discurso la paz a un asunto de desarmar a las guerrillas, negando el conflicto armado de carácter político; tal como lo sostiene su patrocinador el ex presidente Uribe.

La crisis que llega

En el transcurso del año, el proceso de solución política entró en crisis, una vez ocurrido el desarme de las FARC, las élites dominantes asumieron la guerra mediática contra las FARC -*ya convertida en partido*-, para obstruirlas políticamente y continuar extinguiéndolas.

El Gobierno estancó la Mesa de conversaciones con el ELN, durante el primer semestre del 2018, debido a la alianza hecha entre los seguidores de Uribe y los partidos de la coalición de gobierno, aprovechando la debilidad del Gobierno de Santos.

El Congreso y las Cortes fueron diligentes con iniciativas que modifican los acuerdos, recortando reivindicaciones para las comunidades, los movimientos alternativos y para las mismas FARC; pero se mantienen negligentes para implementar acuerdos sobre reforma política, las circunscripciones territoriales especiales de paz, la política de desarrollo agrario integral, la sustitución de cultivos de coca y de la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo, entre otros acuerdos.

El objetivo del diálogo, de los acuerdos y del proceso de paz es erradicar la violencia política, pero actualmente cuando hay un post Acuerdo y una Mesa de Conversaciones estancada con el ELN, lo que está ocurriendo es la persecución y matanza de líderes sociales, para lo cual la élite hace crecer el paramilitarismo.

A más de un año de las FARC haber entregado las armas el Gobierno no ha financiado ningún proyecto productivo a los excombatientes, pero continúa la estigmatización y los asesinatos de ellos y sus familiares.

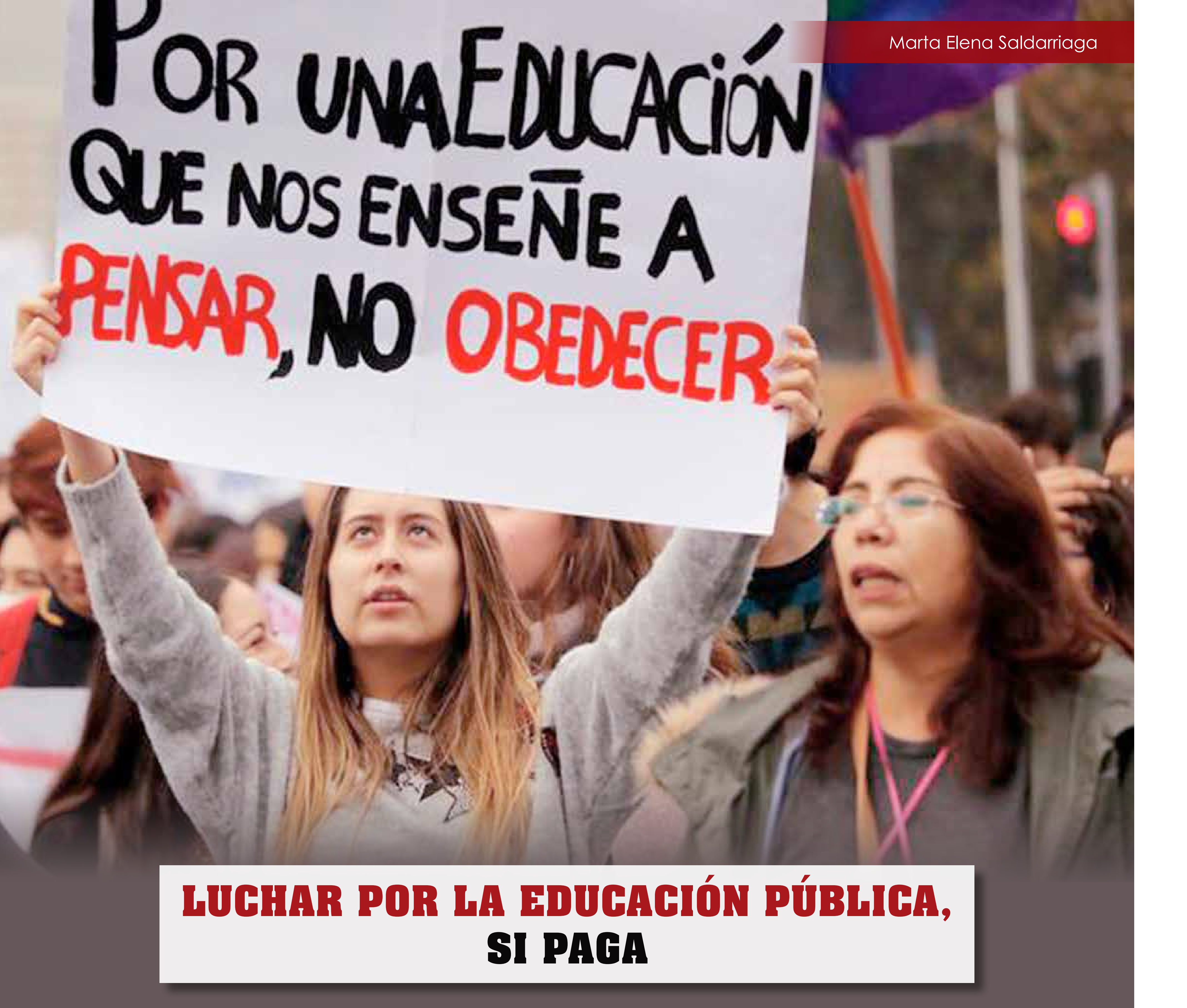
El actual Gobierno ha ralentizado la implementación de los Acuerdos con las FARC y mantiene congelada la Mesa con el ELN.

La falta de voluntad y de compromiso de las clases dominantes, para dialogar y cumplir lo acordado, genera desconfianza en los exguerrilleros de FARC y de los combatientes del ELN, y escepticismo en muchos sectores de la sociedad.

La paz es más que negociación

El desarrollo de un amplio movimiento constituido por diversos sectores sociales, ambientales, de género, étnicos y por el movimiento progresista democratizador, es quien presiona la continuidad y fortalecimiento del proceso de solución política; entendida como el diálogo para enfrentar los problemas del país y la voluntad para implementar los acuerdos hechos.

Con el respaldo de la comunidad internacional, el movimiento colombiano contra la guerra y por la paz, como proyecto democratizador, podrá seguir avanzando en su camino transformador.



LUCHAR POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SI PAGA

Marta Elena Saldarriaga

Tras pronunciamientos, cartas, asambleas, campañas por las redes sociales (#SOSEducaciónPública), y otras expresiones sociales y populares desarrolladas en los últimos meses; el pasado miércoles 3 de octubre, miles de estudiantes y docentes de las universidades públicas del país, se movilizaron en denuncia de la gran crisis presupuestal que por décadas ha afectado a la educación superior. Ahora el cierre de la educación superior pública es inminente. Las universidades públicas tienen un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y de 15 billones en inversión.

La paternidad de la ruina

El financiamiento de las Universidades estatales en Colombia tiene un defecto de origen, nacido con la Ley 30 de 1992, que organizó el servicio público en la Educación Superior, y que a la vez da cuerpo al 'concepto constituyente' de autonomía universitaria, que esta Ley pretendía desarrollar.

En la década de los 90, los presupuestos se actualizaban con la proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mediante la figura de Presupuestos Adicionales, las Universidades de manera individual, con gestión, lograron mayores recursos para superar esta barrera, y al final alcanzaban aumentos reales por encima del IPC.

De esta forma, las Universidades fueron sorteando los costos crecientes, causados por la expansión de la matrícula y sobre todo por la remuneración de los docentes.

En 1993 los aportes de la nación a las universidades públicas representaban el 73 por ciento de sus recursos y para el año 2016, éstos habían disminuido hasta el 48 por ciento. Por ese motivo, las universidades que se encargan de educar a la mayoría de los colombianos cayeron en la ruina.

El Sistema de Universidades Estatales (SUE) reporta a la fecha, un déficit de 434.874 millones de pesos para terminar de cumplir las obligaciones de este año y un desfinanciamiento acumulado de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión.

Soluciones que empeoran la crisis

La Reforma tributaria de 2016 destinó recursos que fueron desviados al ICETEX y 4 billones de pesos al programa Ser Pilo Paga; un remedio terminó por agravar la enfermedad.

El panorama en cuanto a educación técnica y tecnológica es aún peor. Debería ser la instancia clave para articular la educación con las necesidades del desarrollo, para formar para el trabajo a centenares de miles de colombianos, pero el Gobierno apenas destinó a la educación técnica superior, el equivalente a la cuarta parte de la inversión que reciben las universidades.

Nuestra educación técnica es una de las más atrasadas del continente en cuanto a cobertura y calidad. Por falta de re-



cursos, de voluntad política, de responsabilidad con los estudiantes colombianos, para integrar el sistema de educación terciaria (técnica, tecnológica y universitaria) como lo plantean las normas vigentes.

Lo sorprendente y loable es que, aún en condiciones tan adversas, las universidades públicas han cumplido cabalmente su labor. Más de la mitad cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad y, con base en generar recursos propios, han alcanzado logros tan sobresalientes, como aumentar en 124 por ciento la cobertura entre los años 2000 y 2018.

Las universidades públicas son las únicas que están presentes en las regiones más marginadas del país, la mayoría de sus estudiantes son los colombianos más excluidos, y sus estudiantes siempre se destacan por estar mejor calificados que, aquellos que asisten a las instituciones privadas.

Paro Nacional presiona una Solución

Una protesta nacional fue aprobada en Asamblea de profesores, trabajadores y estudiantes, quienes rechazan que el Gobierno Nacional malgaste los recursos de la nación, para comprar armas sofisticadas y aumentar el pie de fuerza militar, mientras a las universidades públicas le niegan recursos y disminuyen los existentes.

En el Auditorio León de Greiff la Asamblea General de la Universidad Nacional de Colombia, decretó el próximo de 10 de octubre como hora cero del paro nacional, como acción de movilización permanente para defender la educación superior.

Pliego de Peticiones del Paro Nacional

1. El incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las instituciones de Educación Superior públicas del país.
2. La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa de interés de 0%, condonación para los estudiantes del programa de Ser Pilo Paga, así como garantías de permanencia y graduación para los partícipes en dichos programas.
3. Congelamiento inmediato de las matrículas en las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas.
4. El aumento de presupuesto para Colciencias en un 100%, así como el cambio de criterio de medición y asignación de los recursos de Colciencias, con el objetivo de igualar las agendas investigativas que incluya en su conjunto las humanidades, las artes, las ciencias, etc.
5. La generación de un plan de pago en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para subsanar el déficit de las universidades públicas que hoy asciende a más de 16 billones de pesos.
6. El rechazo de la actual forma en la que se constituye el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a partir de nuevos criterios y mediante la articulación con el sistema general de Educación Superior.
7. Derogación de la ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso, bajo la lógica de la construcción de una nueva regla fiscal para la educación pública y el ajuste del costo de matrículas de las IES privadas.
8. El no condicionamiento de las IES a procesos de acreditación de alta calidad de sus programas de manera obligatoria, siendo ésta de manera voluntaria y no un criterio para la financiación.
9. Derogatoria de la ley 1740 de inspección y vigilancia y del decreto 1280.
10. 10. Respeto y garantías para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, así como la no intervención del ESMAD y la fuerza pública en los campus.

LÍDERES INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINOS SON EL 81% DE LOS ASESINADOS



"La paz social, objetivo de toda sociedad, se consigue poniendo al individuo en mejores condiciones para resistir que para atacar"

José Eusebio Caro Ibañez
(Ocaña 1817-Santa Marta 1853)

En un Informe de principios de este mes, el Fundación Ideas para la Paz, dice que este año han sido asesinados 93 líderes y defensores de derechos humanos [1].

El Informe *"Todos los nombres, todos los rostros"* [2], elaborado por la Marcha Patriótica, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ), asegura que hasta el 5 de julio, habían asesinado a 123 lideresas y líderes sociales. Durante el gobierno de Duque han asesinado a 35 líderes, 10 de ellos en el mes de septiembre.

Una investigación hecha por Dejusticia y Human Rights Data Analysis Resource Center (HRDARC) [3], concluyó que existe una sub contabilidad de los ase-

sinatos de líderes sociales en Colombia; esto significa que el aumento de estos crímenes entre 2016 y 2017, es mayor al reportado por las cifras oficiales, pues mientras estas registran 160 asesinatos en 2016 y 172 en 2017; la investigación concluyó en que las cifras más objetivas son 166 y 185; que representa respectivamente un 4 y 8 por ciento más.

Genocidio contra líderes de abajo

El 80,5 por ciento de los líderes asesinados hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y de Autoridades indígenas o afrocolombianas.

En conflictos por erradicación, que involucra a comunidades cultivadoras de coca, matan el 13 por ciento de los líderes.

El 83,19 por ciento de los homicidios en el 2018, ocurren dentro de conflictos por tierra, territorio y recursos naturales [4].





¿Por qué el Gobierno rehúye suscribir Acuerdos de Protección?

Colombia es el tercer país del mundo en donde más asesinan líderes defensores del medio ambiente.

El pasado 27 de septiembre en la ONU, 24 Estados firmaron el Acuerdo de Escazú [5], y de América del Sur, solamente Colombia y Chile no lo firmaron. Según este Acuerdo, cada país:

"Garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad".

La legítima defensa

Para perpetrar un Genocidio, las clases dominantes siembran odios y para esto, primero calumnian a quienes quieren eliminar. Esta maquinaria de persecución fue la que usaron contra el pueblo judío y el pueblo armenio en los genocidios más conocidos, del siglo pasado.

En Colombia a las comunidades que alzan su voz contra el empobrecimiento, la exclusión y la depredación de los territorios, son calumniadas como "redes de apoyo al terrorismo", "infiltrados de la guerrilla", "auxiliares de la subversión", etc.; denominaciones que las reúnen bajo el apelativo de "enemigo interno"; sindicación que los convierte en objetivo militar de los agentes paramilitares, militares y policiales del Estado.

Denunciar esta persecución política y el Genocidio en curso contra los líderes sociales y opositores de izquierda, es una solidaridad urgente, que requiere el pueblo colombiano.

Hoy más que nunca tiene validez que las comunidades activen y fortalezcan sus guardias campesinas, indígenas y cimarronas, para la autoprotección colectiva, que les permita seguir en pie de lucha por sus reivindicaciones históricas.

---

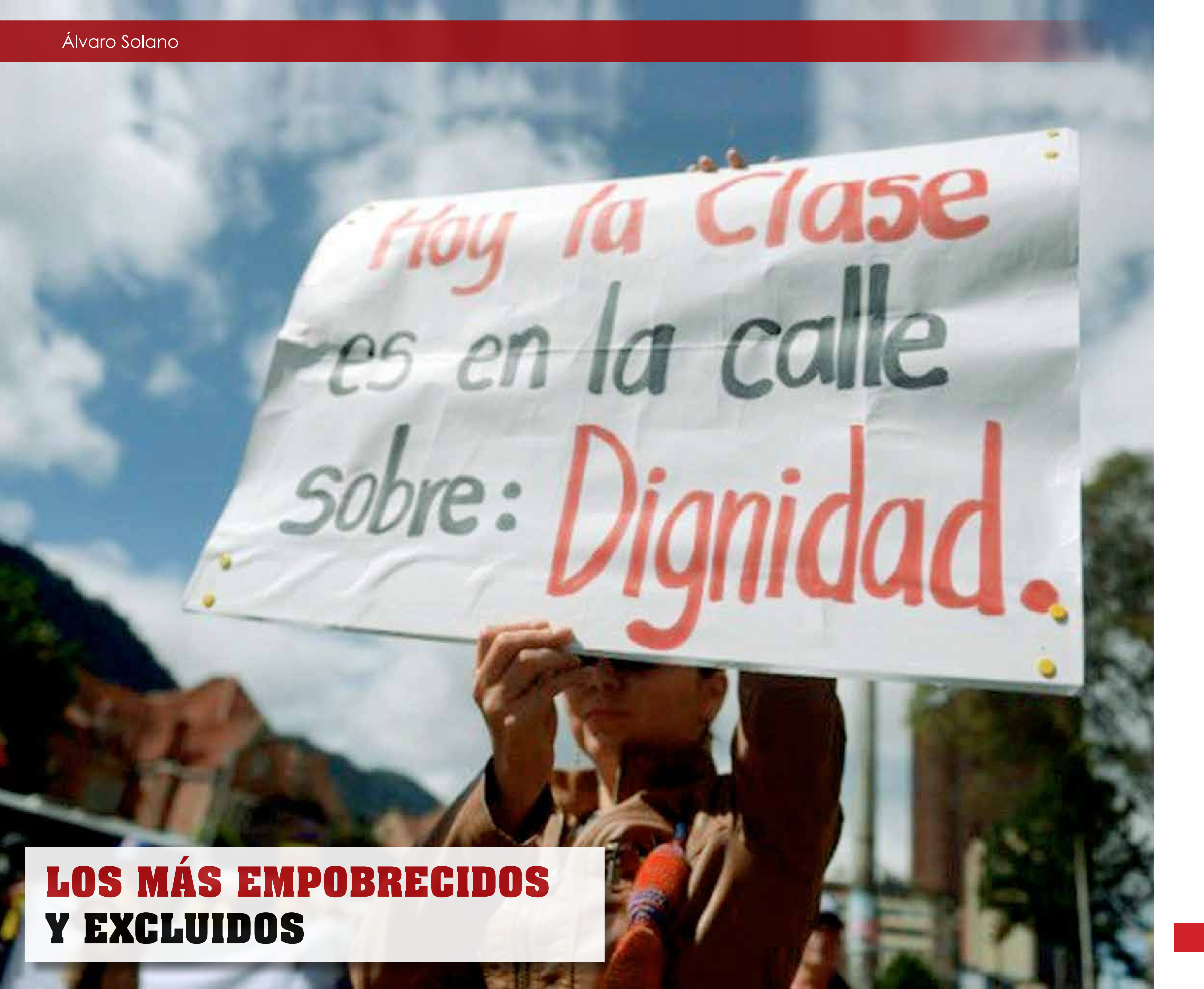
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-2018-han-muerto-93-lideres-sociales-fundacion-ideas-para-la-paz-articulo-815565

[2] https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualización-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018-2.pdf

[3] http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/asesinato-de-lideres-sociales-aumento-en-2016-y-2017-CL9409422

[4] https://bit.ly/2DNBX4s

[5] http://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/acuerdo-escazu-14-paises-firmaron-historico-tratado-la-defensa-los-derechos-ambientales



LOS MÁS EMPOBRECIDOS Y EXCLUIDOS

Anunció la semana pasada el Instituto Brookings de Washington que "*El mundo ha alcanzado un punto de inflexión ante la pobreza global: Más de la mitad de la población total ahora es de la clase media o rica*" [*]. Estas "cuentas alegres" las sacan con base en datos del Banco Mundial de 188 países.

Para sacar estas conclusiones definen en 4 los gastos del hogar: alimentos, electrodomésticos, ocio y vacaciones. ¿Y el resto? Clasifican como clase media a quienes gastan entre 11 y 110 dólares al día, que equivaldría a gastar entre 33.00 y 330.000 pesos diarios. No hay que olvidar que el salario mínimo diario en Colombia es de 26.000 pesos.

Para el Brookings, el 50 por ciento de la población mundial son de la clase media o de la rica, como muestran estos datos:

CLASE	MILLONES	%
Pobre	630	8,3
Vulnerable	3.160	41,7
Media	3.590	47,4
Rica	200	2,6
TOTAL	7,580	100

Otro estudio reciente de la OCDE, CEPAL, CAF y de la Comisión Europea registra, que en América Latina y el Caribe, **los pobres son el 23 por ciento de la población, mientras el 40 por ciento son del estrato vulnerable**. Lo que evidencia que **el 63 por ciento de los latinoamericanos y caribeños están bajo el límite de la pobreza**, viven del trabajo informal, con numerosas incertidumbres, muy por debajo de los promedios mundiales.

Si frente a la pobreza la situación de nuestro sub continente es peor que el resto del mundo, hay que recordar que la situación de Colombia es la segunda peor, después de Haití.

"Una economía para el 99%"

"El crecimiento económico solo está beneficiando a los que más tienen, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres", esta es la conclusión a que llegó la confederación humanitaria Oxfam, integrada por 17 organizaciones no gubernamentales de 90 países, en su informe "Una economía para el 99%".

El 1 por ciento de la humanidad controla tanta riqueza como el 99 por ciento restante. El modelo económico y los principios que rigen su funcionamiento nos han llevado a una situación extrema, insostenible e injusta; en la que 8 archimillonarios son más ricos que la mitad más pobre del mundo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 81 millones de personas en el mundo padecen de hambre, 1 de cada 9 seres humanos se encuentra subalimentado. En América latina 39 millones de personas aguantan hambre.



10 empresas en el mundo entre ellas, Microsoft, Exxon Mobil y Facebook, obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos.

100.000 millones de dólares pierden los países en desarrollo como consecuencia de la evasión fiscal de grandes empresas a través de Paraísos fiscales.

Las mujeres ganan entre 31 y 75 por ciento menos que los hombres a causa de la brecha salarial y de otras desigualdades económicas.

Pobre Colombia

Colombia es el segundo país más desigual de América latina, después de Haití, donde el hambre y la miseria, junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y salud son hechos cotidianos. Según el Departamento Nacional de Planeación, en Colom-



bia 3,6 millones de personas aguantan hambre.

Según la CEPAL, en Colombia el 8,5 por ciento de la población vive en la pobreza absoluta, el 28 por ciento viven en la pobreza, ya que sus ingresos no alcanzan para adquirir la canasta mínima de alimentos y otros bienes y servicios. El 53 por ciento de los pobres sufren de analfabetismo, el 14 por ciento de los hogares derivan su sustento de su propio negocio.

La desigualdad en el campo está por las nubes. Según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2014, el 71 por ciento de los trabajadores del campo están vinculados a unidades productoras agropecuarias (UPA) menores de 5 hectáreas (Has). En las UPA de más de 1.000 Has se ubica el 0,2 de los productores. La violencia, el desplazamiento, y las amenazas han provocado que el 1 por ciento de las familias ricas y empresas trasnacionales se apropien el 81 por ciento del territorio nacional.

Según un informe presentado por el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), asegura que el despojo generado por los desplazamientos, permitió que entre 1980 y 2016 más de 7,4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, pasando a manos de terratenientes y narcotraficantes con la complacencia del Estado.

A partir del 2002, hay un otorgamiento de Títulos mineros y de hidrocarburos que se elevan a 4,9 millones de hectáreas entregadas a cambio de favores o por dinero a funcionarios estatales, lo que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas, afros y campesinos; lo mismo que graves afectaciones al medio ambiente.

La UNICEF reveló que 1 de cada 10 niños sufre desnutrición crónica y el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de desnutrición.

En cuanto al empleo el 64 por ciento de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 por ciento bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 por ciento de los asalariados rurales carecen de protección social, además el 47,1 por ciento de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.

El DANE reporta que "cerca de 10 millones de trabajadores no ganan un salario mínimo, para mantener una familia de 3 personas, pese a que 2 de ellas trabajan". Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una persona en Colombia nacida en una familia con ingresos bajos tardaría 11 generaciones en lograr el ingreso promedio del país.

---

[*] https://t.co/5JUydT5Tp4 pic.twitter.com/0m3vYSZCV0 — Brookings (@BrookingsInst) 30-09-2018

NO A LA BORRACHERA DE LA GUERRA



1- construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo.
2- no negar los conflictos internos ni reducirlos a un conflicto externo, con el enemigo
3- es irracional, por la desproporción existente entre el valor de lo que se persigue y el valor de lo que se está dispuesto a sacrificar.
4- los gobiernos para negar la disensión y las dificultades internas, la imponen a sus súbditos.
5- sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.

Estanislao Zuleta (Medellín 1935 - Cali 1990)